



## El mito estratégico del posconflicto

**El futuro de la seguridad no debería ser concebido en términos de recorte presupuestal y desmovilización masiva sino más bien desde la perspectiva de una revisión estratégica destinada a definir las misiones futuras de la Fuerza Pública.**

*Por Román Ortiz\**

*Fecha: 08/21/2008 – Semana. com*

Con las Farc inmersas en una crisis terminal, algunos de los principales líderes de las Bandas Criminales Emergentes buscando salidas negociadas para escapar a la presión de Fuerza Pública y una generación de capos del narcotráfico extraditados, las voces anunciando la llegada del tan ansiado posconflicto se han multiplicado de forma exponencial. Dentro de este coro, muchos contemplan el advenimiento de esta etapa en la evolución del escenario estratégico colombiano con resonancias casi míticas.

A sus ojos, el posconflicto promete ser un periodo nuevo y distinto. Viejos problemas como el terrorismo y el narcotráfico quedarán definitivamente atrás para dar paso a una etapa donde la resolución de los problemas económicos y sociales deberá monopolizar la atención del Estado. En consecuencia, la orientación del gasto público tendrá que sufrir un giro radical. Con el país sumido en una paz definitiva, la inversión en seguridad dejará de tener sentido y podrá ser recortada sin contemplaciones. Al mismo tiempo, este “dividendo de la paz” se convertirá en el remedio definitivo para acabar con la desigualdad y la pobreza. De este modo, Colombia se convertirá mágicamente en un país libre de riesgos cuyos ciudadanos no tendrán que asumir los costos de la defensa de la paz y la democracia.

Sin embargo, la tozuda realidad estratégica conspira contra esta fantasía. Sin duda, la guerrilla se encuentra en sus horas más bajas; pero la historia del terrorismo demuestra que grupos con pocos recursos pueden generar niveles significativos de violencia durante largo tiempo. En este sentido, cabe recordar que las Farc están lejos de ser una organización sin medios –unos 8.000 combatientes y centenares de millones de dólares – por lo que parece probable que conserve una gran capacidad para dislocar la vida ciudadana.

Además, las Bandas Emergentes están contenidas; pero no acabadas. De hecho, parece existir una lista inagotable de sicarios dispuestos a reemplazar al frente de las “oficinas de cobro” a los capos arrestados y llevados ante la justicia. Todo ello sostenido por unas economías ilícitas donde el narcotráfico junto con otros negocios –extorsión, corrupción, etc. – garantizan los recursos para armar y sostener ejércitos ilegales. En este contexto, la situación regional tampoco ayuda. Algunos países vecinos –Venezuela y Ecuador – no solo han demostrado una notable falta de interés en combatir a los grupos armados ilegales colombianos sino que además se han embarcado en programas de rearme de grandes dimensiones. Entonces, a la vista de lo dicho, ¿se puede pensar en un recorte radical del gasto en seguridad?

---

\* Coordinador del Área de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Ideas para la Paz.

Ciertamente, seis años de Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) han transformado radicalmente el escenario estratégico. Como todos los indicadores confirman, se ha reducido sustancialmente la capacidad armada de criminales y terroristas. Pero además, la naturaleza de sus acciones también ha cambiado. Una violencia cada vez más dirigida contra los civiles, con objetivos criminales y más urbana se está superponiendo a las acciones armadas contra la Fuerza Pública destinadas a destruir la presencia del Estado en las zonas rurales.

Entretanto, el propio éxito de la PSDS ha generado nuevas necesidades con la aparición de nuevos grupos de riesgo que deben ser protegidos –victimas y desmovilizados– así como de regiones –las fronteras– que reclaman más atención. Todo ello dentro en un contexto donde los avances en la pacificación interna combinados con el avivamiento de las tensiones vecinales reclaman una asignación de prioridades más equilibrada entre seguridad interior y defensa externa.

En tales circunstancias, el futuro de la seguridad no debería ser concebido en términos de recorte presupuestal y desmovilización masiva sino más bien desde la perspectiva de una revisión estratégica destinada a definir las misiones futuras de la Fuerza Pública. En este contexto, se podrían plantear cambios en la contribución militar al orden interno, incluyendo una reducción del volumen total de la fuerza y un redespiegue de sus efectivos.

Pero al mismo tiempo, se debe aceptar que durante largo tiempo las Fuerzas Militares tendrán que hacer alguna clase de contribución a la seguridad interior a la vez que se fortalece su capacidad de defensa externa y se promueve su participación en misiones de mantenimiento de la paz. Entretanto, si se espera que la Policía expanda su papel en la defensa del orden público, habrá que dotarla de los recursos necesarios para que pueda operar con igual eficacia en las calles de Bogotá y las selvas del Putumayo.

En este sentido, parece poco verosímil plantear la llegada del posconflicto como una oportunidad para desmantelar el aparato de seguridad. Entonces, la pregunta es porque se multiplican las voces partidarias de una reducción masiva del gasto en seguridad. Muy probablemente, por una combinación de percepciones académicas erróneas y posiciones políticas oportunistas.

Por un lado, un número de analistas ha tendido a equiparar el conflicto colombiano con las guerras centroamericanas de los 80. Por tanto, ha supuesto que la pacificación del país debía ocurrir de forma semejante, a través de un acuerdo de paz con los grupos armados ilegales seguido de una radical de reducción del aparato militar gubernamental. Una vía “a la salvadoreña” que ha ignorado el papel clave de la economía de la droga en la prolongación de la violencia en Colombia. Entretanto, algunos políticos han visto en la promesa de un “dividendo de la paz” una herramienta eficaz para ganarse la simpatía de los electores.

En consecuencia, han cultivado la expectativa de que la mejora del orden público en el país es la antesala de una reducción drástica de los presupuestos de seguridad que permitirá una expansión del gasto social. Una propuesta que ha pasado por alto la posibilidad de que un debilitamiento de la política de seguridad lleve a desandar parte de lo andado en el proceso de pacificación. Probablemente, se trata de planteamientos faltos de realismo y cuajados de riesgos; pero también atractivos para muchos votantes. Por ello, resulta urgente un debate público para explicar a los ciudadanos que las necesidades de seguridad de las sociedades se transforman, pero no desaparecen. Incluso cuando la victoria en un conflicto parece al alcance de la mano.